

ca, tanto en el proceso cuanto en el expediente de amparo, se negó al defensor de los acusados presentar prueba en favor de ellos, lo cual importa negarles su defensa, siendo así que aun en la ley de 3 de Mayo de 1873, prorogada por la de 10 de Abril de este año, no se suspendió esa garantía constitucional contenida en la parte 5ª del artículo 20 de la Constitución.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el artículo 101 de la misma Constitución, se decreta: que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 4 de Agosto próximo pasado, por el Juez de Distrito de Michoacan, que declara: que la Justicia federal ampara y protege á María Francisca Martínez y José María Amescua, contra la sentencia del C. Prefecto de Morelia, que los condenó á la pena del último suplicio.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—Simón Guzmán.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 12 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de la cantidad de catorce pesos sesenta y dos centavos á título de derechos de introducción, causados por una caja de rebozos remitida de Matatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal dice: que facultado el Congreso de la Union, por el artículo 62 fracción IX de la Constitución general, expidió el decreto de 1º de Mayo de 1868, y con el que ha querido nivelar el comercio de Estado á Estado, en oposicion al que ha decretado el Congreso del Estado de 4 de Diciembre de 1873, supuesto que este impone un gravámen á los efectos nacionales á su introducción, y no lo hace á su importación, y en esta contradicción no hay mas que atenernos á aquella, la que dimanando de la Carta fundamental, debe tenerse como ley suprema, como se previene en su artículo 126.

En consecuencia, el querer llevar á efecto la disposición del Estado, viola indudablemente las garantías que otorga la Constitución en sus artículos 4 y 16, y que invocan los quejosos Sres. Sandoval y Bülle; ni se diga que los rebozos objeto de este amparo, es una mercancía que no produce actualmente el Estado; pero esto lo puede producir, y esta posibilidad hace que se le aplique la ley citada de 1º de Mayo de 1868; de lo contrario daría lugar á que con ese pretexto se impusiesen gravámenes á esos mismos efectos nacionales, lo que ha querido evitar el artículo constitucional, el que impide que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas.

Por todo lo ya expuesto, el que suscribe pide se decrete el amparo tal y como lo han

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA MANA

solicitado los Sres. Sandoval y Bülle, por ser de justicia, y dar así el debido cumplimiento á las leyes generales.

Guaymas, 12 de Junio de 1874.—*José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas 27 de Junio de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, 26 de Junio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro del derecho de introduccion, de una caja de rebozos que recibieron por el pailebot "Pacífico." Visto el informe con justificacion del Administrador de rentas de este puerto: Visto el pedido fiscal y cuanto mas convino tener presente, y considerando:

Que la ley general de 2 de Mayo de 1868, al prohibir que se imponga á los frutos de otros Estados, mayores contribuciones que las que exige á los suyos propios, debe entenderse de frutos que puedan extraerse ó introducirse alternativamente, y de ninguna manera de frutos que no se produzcan en un Estado.

Que los rebozos jamás se han fabricado ni se fabrican actualmente en Sonora; y por consiguiente, mal puede imponerse derecho de extraccion á un artículo que no se produce en el Estado.

Que no habiendo razon para imponerse derecho de extraccion á los rebozos, puede sin inconveniente cobrárseles derecho de introduccion, puesto que en este caso no existe desnivel en el comercio, no atacándose por consiguiente, garantía ninguna constitucional en las personas de los quejosos; este Juzgado, con fundamento de lo expuesto, falla:

Primero: La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de Rentas de este puerto, de catorce pesos sesenta y dos centavos por

derechos de introduccion de una caja de rebozos que recibieron por el "Pacífico" el 22 de Mayo próximo pasado, por no haber violacion de garantía alguna en las personas de los quejosos.

Segundo: Notifíquese; publíquese en el periódico oficial del Estado y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Fernando María Astiazarán, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando María Astiazarán.*—Asistencia.—*L. del Rincon.*—Asistencia.—*P. A. Piña.*

Es copia que certifico. Guaymas, 27 de Junio de 1874.—*Fernando María Astiazarán.*—Asistencia.—*P. del Rincon.*—Asistencia.—*P. A. Piña.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 21 de Setiembre de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de la cantidad de catorce pesos sesenta y dos centavos, á título de derechos de introduccion, causados por una caja de rebozos remitida de Mazatlan á consignacion de los promoventes, por violarse en concepto de estos con tal cobro, las garantías que consignan los artículos 4º y 16 de la Constitucion federal de la República, y ser contrario á la ley de 1º de Mayo de 1868 expedida por el Congreso federal, en uso de la facultad que le confiere la fraccion 9ª del artículo 72 de la misma Constitucion. Visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal; el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito, en 26 de Junio del pre-

sente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de la cantidad de catorce pesos sesenta y dos centavos por derechos de introduccion de una caja de rebozos que recibieron en el pailebot "Pacífico" el 22 del pasado Mayo.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique, Landa* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el subteniente de Infantería de línea, C. Julio N. Abdalá, en calidad de defensor del procesado Emigdio Guerrero, sargento 2º del Batallon número 3, contra la sentencia de muerte á que lo condenó el Jurado militar de la plaza de ese Estado, por el delito de insubordinacion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el sargento Emigdio Guerrero, del Batallon número 3,

TOMO VI.—PARTE II.

por medio de su defensor el C. subteniente del mismo cuerpo, Julio N. Abdalá, solicitó por su escrito de 27 de Marzo último, que la Justicia federal se sirviera ampararlo y protegerlo contra la sentencia ejecutoria que pronunció el mismo día el jurado militar, imponiéndole la pena de muerte por el delito de insubordinacion que se le atribuye haber cometido respecto del subteniente de su compañía C. Mário de J. Villegas, fundándose en que dicha pena no es aplicable al caso, segun ofreció que demostraría en otro libelo; pidiendo el amparo correspondiente, y que se suspenda desde luego la ejecucion de dicha pena hasta que se pronuncie el fallo en este juicio. Y habiéndose accedido á la referida suspension, se presentó por el actor el ocursó que ofreció, ampliando los fundamentos de su queja; y pedido el informe correspondiente á la autoridad militar, fué emitido en oficio de 1º de este mes, haciendo relacion de lo ocurrido, con los fundamentos de la sentencia pronunciada.

Examinada la actuacion y la causa formada al quejoso, resulta con evidencia que la pena de muerte que se le ha impuesto por el Jurado militar, separándose del dictamen del C. Asesor, es contraria á lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitucion federal, que otorga las mas preciosas garantías individuales, pucsto que aseguran la vida del hombre, y entre ellas la de que la pena de muerte queda limitada por ahora á los delitos graves del orden militar.

Basta la simple lectura del proceso para convencerse de que el sargento Guerrero no ha cometido el delito que se le atribuye, por que en su comprobacion no existe la prueba plena que la ley requiere, y por lo mismo merecía la absolucion con arreglo al espíritu de la última parte del artículo 24, que abolió la práctica de absolver de la instancia; pero suponiendo por un momento que hubiese cometido alguna falta, esta sería disimulable por el estado de embriaguez en que se encontraba el procesado; mas por los términos en que se produjo contestando